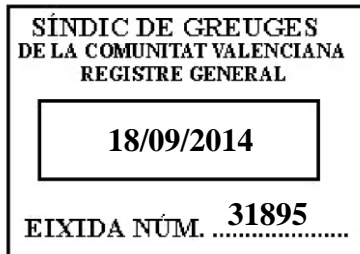




SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Conselleria de Bienestar Social  
Hble. Sra. Consellera  
C/ Castán Tobeñas, 77 - CA90 - Torre 3  
VALENCIA - 46018 (Valencia)

=====  
Ref. Queja nº 1408239

=====  
**Asunto: Atención a la dependencia**

Hble. Sra.:

Con fecha de 10/06/2014 solicitamos informe en relación con la queja de referencia, iniciada a instancia de Dña. (...) en nombre de su padre D.(...). Le indicábamos que el 30 de julio de 2012 su padre solicitó la valoración de su grado de dependencia, a efectos de percibir las ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Con fecha de registro de entrada en esta Institución de 14 de julio de 2014, la Conselleria de Bienestar Social nos comunicaba lo siguiente:

*Consta en el expediente, con fecha 2 de agosto de 2012, el beneficiario (...) presentó una solicitud de reconocimiento de situación de dependencia al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia y su normativa de desarrollo.*

*El 19 de junio de 2014 se ha realizado la valoración en el entorno habitual de la persona interesada, conforme a los criterios previstos en el baremo de valoración de la situación de dependencia, aprobado por el real Decreto 174/2011 de 11 de febrero y que ha sido desarrollado, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, por el decreto 1872011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el*

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

<b>Código de validación:</b> *****	<b>Fecha de registro:</b> 18/09/2014	<b>Página:</b> 1
------------------------------------	--------------------------------------	------------------

C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT. Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00. Fax 965 93 75 54

<http://www.elsindic.com/>

*procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.*

*A la vista de las actuaciones indicadas, en el plazo más breve posible se dictará Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, que corresponda (que le será notificada, en su caso, junto con la propuesta del Programa Individual de atención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1872011, de 25 de febrero, del Consell)*

Tras dar traslado del informe de la Consellería a la promotora de la queja, esta nos informa telefónicamente que su padre falleció en el mes de agosto de 2014.

En el caso que nos ocupa han transcurrido 24 meses (2 años) desde que el beneficiario presentó su solicitud hasta la fecha de fallecimiento sin que se hubiera resuelto la misma, y sin que en esta Institución nos conste nos que la causa de la demora fuese imputable al interesado.

En relación con esta problemática se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso administrativo, Sección 4ª, que en la Sentencia 40/14, de 31 de enero de 2014

*“(…)no puede desconocerse que la prolongada, defectuosa y morosa tramitación del procedimiento encaminado a la determinación de los servicios y prestaciones a que hubiera tenido derecho la persona, reconocida como dependiente, genera derecho a indemnización –con base legal-, en los términos que pasamos a explicar, y en el bien entendido que dicho derecho nace y deriva de la responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente y anormal funcionamiento del servicio público.*

*No en vano en nuestro caso, transcurrieron unos dos años desde la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia hasta la presentación del recurso, aprobándose un PIA provisional, pero no definitivo, cuya resolución (y notificación) está prevista en 3 meses desde la fecha notificación Resolución reconociendo la situación de dependencia.*

*Y ello, sin que la Administración tramitadora evidenciara ni pusiera de manifiesto la concurrencia de circunstancias excepcionales que sirvan a justificar la dicha demora(…)”*

*“(…)en los casos –cual el que aquí analizamos-, en que la resolución en plazo o al menos, dentro de unos márgenes de demora razonable, deviene esencial por la naturaleza de la situación de base (hechos determinantes), la demora constituye un funcionamiento anormal de la Administración, que da derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, en los términos también previstos por el Ordenamiento.*

*No en vano la normativa sobre dependencia y promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia destaca como objetivos fundamentales los de promoción de la autonomía personal de las personas cuyas deficiencias y/o padecimientos físicos y/o psicológicos –de envergadura, a lo que se une muchas veces la elevada edad del interesado- les hacen acreedoras de “ayuda” institucional, en orden al desarrollo de una vida digna, de ahí que el “tiempo” que la Administración ha de emplear para determinar las medidas necesarias en orden a atender las necesidades de dichas personas, con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, ha de ser el indispensable y necesario(…)”*

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: \*\*\*\*\*

Fecha de registro: 18/09/2014

Página: 2

El caso al que hace referencia esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana es sustancialmente idéntico al planteado ante esta Institución por otros ciudadanos; haciéndose referencia en dicha sentencia del TSJCV al “anormal funcionamiento del servicio público” debido a una dilación de dos años desde la solicitud de ayudas a la dependencia hasta el fallecimiento del interesado sin que la misma se hubiera resuelto, coincidiendo justo con la demora del presente expediente, por lo que en atención a dichas circunstancias y con tales antecedentes procedo a resolver el presente expediente:

El artículo 1 de la Ley de la Dependencia crea un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia en los términos establecidos en las leyes. Este derecho se compone de un nivel mínimo, igual para todos los españoles, financiado exclusivamente por la Administración General del Estado (arts. 1, 7.1º y 9 de la Ley).

Existe un segundo nivel fijado mediante acuerdos entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma (arts. 8.2º y 10 de la Ley).

Por último existe un tercer nivel de financiación, exclusivamente autonómica (art. 7.3º de la Ley).

Hasta aquí la referencia a las prestaciones. La Ley apuesta por un amplio abanico de prestaciones técnicas, de preferencia sobre las prestaciones económicas. El Catálogo de Servicios del Sistema, recogido en el artículo 15, es el siguiente:

- *Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.*
  - *Servicio de Teleasistencia.*
  - *Servicio de Ayuda a domicilio:*
  - *Atención de las necesidades del hogar.*
  - *Cuidados personales.*
- *Servicio de Centro de Día y de Noche:*
  - *Centro de Día para mayores.*
  - *Centro de Día para menores de 65 años.*
  - *Centro de Día de atención especializada.*
  - *Centro de Noche.*
- *Servicio de Atención Residencial:*
  - *Residencia de personas mayores en situación de dependencia.*
  - *Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.*

La Ley regula, escasamente, el procedimiento para obtener las ayudas y prestaciones (art. 28), refiriéndose a la forma de iniciarlo, a la valoración, a la elaboración del Programa Individual de Atención como instrumento que definirá las prestaciones adecuadas a cada caso. El Consell aprobó el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes. Esquemáticamente, el procedimiento consiste en solicitud indicando preferencia por la prestación o servicio, subsanación, en su caso, de la solicitud inicial, informe de entorno, valoración en domicilio, propuesta de resolución de grado y nivel, informe social elaboración del Programa Individual de

atención y resolución del mismo. El plazo máximo para resolver es de seis meses (art. 10.2 del Decreto) y los efectos económicos de la resolución favorable lo son, en el caso que nos ocupa, desde esos seis meses.

La falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto. En efecto, se vulnera lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la Administración la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

El artículo 47 de la Ley 30/1992 establece que la observancia de los plazos es obligatoria y su artículo 41, igualmente, obliga a la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de los procedimientos. Con independencia de que el artículo 43.1 establece los efectos de la falta de resolución expresa (silencio administrativo), la Administración tiene obligación expresa de resolver, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992.

El Estatut de Autonomía valenciano establece:

*“Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una Ley de Les Corts regulará el derecho a una buena administración (art.9.1). (...) Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de La Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable y a gozar de servicios públicos de calidad (art. 9.2). (...) En todo caso, la actuación de La Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: (...)la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades (art.10.3). (...)La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad(art. 13.1). (...)La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos (art. 13.2). (...)La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de (...) personas afectadas por discapacidad (art. 16).”*

Esta Institución considera que los motivos que dieron lugar a que el beneficiario falleciera sin resolverse su derecho, pudieran ser imputables a esa Conselleria toda vez que la solicitud fue presentada el 2 de agosto de 2012 y, comunicado el fallecimiento de beneficiario en fecha agosto de 2014, por tanto, habiendo transcurrido más de los seis meses legalmente establecidos para la resolución del expediente. De todo ello se deriva que puede existir responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Bienestar Social, al no quedar acreditado en expediente los motivos del retraso en la no resolución del expediente, y en este mismo sentido se ha pronunciado el TSJ en la sentencia de 21 de junio de 2011 en su Fundamento de Derecho Segundo.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: \*\*\*\*\*

Fecha de registro: 18/09/2014

Página: 4

La responsabilidad patrimonial se regula en el Art. 106.2 de la Constitución española de 1978. El citado artículo consagra el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derecho, **siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.**

Precepto constitucional desarrollado en la actualidad por el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 142, de la ley 30/1992, de 26 de noviembre establece respecto de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, entre otras cuestiones lo siguiente:

*1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.*

*2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Cuando su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.*

Por tanto, **RECOMIENDO** a la Conselleria de Bienestar Social que proceda de oficio a incoar expediente de responsabilidad patrimonial, toda vez que la solicitud se presentó el 2 de agosto de 2012 y el beneficiario **falleció** en agosto de 2014, por tanto habiendo transcurrido el plazo legal para la resolución del expediente, y se notifique a los familiares posibles causahabientes a fin de que ejerzan lo que a su derecho convenga.

Le agradecemos nos remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de la resolución que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Atentamente,

José Cholbi Diego  
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: \*\*\*\*\*

Fecha de registro: 18/09/2014

Página: 5